

raillas; puesto que los bultos fueron los mismos á que la guía se refiere: que esto no debe decirse de todos los bultos, sino de las cuatro cajas que fueron de Mier al Saltillo y de este lugar á Monterey las que es de presumir llevaban muselinas de una propia clase á diferencia de las otras dos que se hallaban en el Saltillo y pasaron á Monterey y cuyas dos cajas, atenta la costumbre, pudieron llegar del Saltillo á Monterey con cartas de envío ó con certificado de la recaudacion de rentas, no pudiendo decirse lo propio respecto de las otras cuatro cajas, puesto que el dueño aseguró que las amparaba la guía, lo cual ha resultado falso por aparecer que tienen diversas marcas; que cuando no hay conformidad entre los efectos y los documentos que deben cubrirlos, caen los primeros en comiso con arreglo á la parte 2ª del art. 15 de la pauta de comisos; se declara:

Primero; se confirma en todas sus partes la sentencia pronunciada por el tribunal de Circuito de Nuevo Leon, Coahuila y Tamaulipas, y en consecuencia se absuelven de la pena de comiso los doce bultos de indiana y los dos de muselina aprehendidos á D. José Ruiloba; declarándose caídos en dicha pena las cuatro cajas de muselina valuadas en 788\$.

Segundo; repóngase por parte de Ruiloba el importe de los sellos quintos invertidos en todo este juicio, así como los de oficio que no esten satisfechos.

Tercero; remítase por el tribunal de Circuito al Juzgado de Distrito de Tamaulipas la copia que el primero falló se sacase para que el segundo proceda á lo que haya lugar respecto del administrador de la aduana de Mier, C. José Ortiz de Montellano, con relacion al cargo que aparece se hizo de cuarenta y dos pesos cincuenta centavos por la guía que se dice iba á despachar y que no se despachó, enmendándose el cargo de los derechos que causó la guía núm. 4 extendida el 24 de Julio de 1870 por no haberse puesto en la factura de esa guía

los números correspondientes de los bultos y haberse extendido copia de la del archivo sin números, diciéndose despues que los tenia.

Cuarto; devuélvanse las actuaciones de 1ª y 2ª instancia al tribunal de Circuito con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez vol toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos respecto del primer punto, y por unanimidad respecto de los demás, los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Agosto veintidos de mil ochocientos setenta y uno.—*F. Guzman.*

TERRENO BALDIO

Adjudicacion hecha en el Juzgado de Distrito de Tabasco á los CC. Juan Guzman y socios de un terreno situado en la ribera actual del rio Mescalapa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El fiscal dice: El C. Encarnacion Reyes denunció ante ese Juzgado un terreno situado entre la ribera actual del rio Mescalapa y la del antiguo cause del mismo rio. La denuncia fué despues traspasada al C. José Vicente García y aunque el traspaso no fué ratificado judicialmente, vd. sin embargo por su auto del dia seis de Setiembre de 1870, ha dado por bastante la subrogacion de los derechos del primero en el segundo.

A la adjudicacion del terreno se han opuesto los CC. Juan Guzman y socios, por creerse dueños del mismo, bien como

parte de su propiedad, bien como beneficio concedido por la naturaleza á los terrenos de que se dicen propietarios.

Las pruebas rendidas por los opositores demuestran: que el terreno, motivo de la denuncia, ha sido formado de pocos años á esta parte, pues así lo aseguran los testigos Roman Acopa, Fermín Perez, Valentín Chablé, Feliciano de la Serna, Calixto Díaz y Francisco Leal, cuya formación ha venido sin duda por la mutación del álveo ó cauce del río Mescalapa, con cuyo antiguo barranco colinda el terreno indicado, según se infiere del tenor del interrogatorio de fojas 49 absuelto afirmativamente por los testigos Nabor de la Cruz, Isidoro Hernandez, Maximiano García, Roman Romero, Toribio Osorio, Victoreano Mendoza, Aniceto y Candelario Jimenez.

Los opositores quisieron justificar, que el actual lecho del río Mescalapa, es el mismo que tenía antes el que ha vuelto, dando lugar á descubrir el terreno que les pertenecía y que antes tenía ocupado.

Los pocos testigos presentados para el efecto, no producirían la fuerza necesaria para desvirtuar la convicción jurídica que nace de las anteriores pruebas, que vienen dando como cierto el hecho de que el terreno denunciado ha sido formado nuevamente de pocos años á esta parte.

No cabe en este lugar la consideración traída por el ilustrado abogado de los opositores de la doble mutación del álveo del río Mescalapa, en medio siglo, porque esa operación no puede efectuarse sino con el trascurso de muchos años, como lo están demostrando en este municipio el río Muerto, y en Chontalpa el río Seco, pues aun cuando año con año se habla de la probabilidad de que Grijalva por este rumbo y el Mescalapa por el otro recobren sus antiguos lechos pasan y pasan los años, sin que se consuma ese fenómeno, que no habrá de ponerse en duda en su realización, pero que no será seguramente en pocos años.

Ahora bien: la accesión legal que quieren hacer valer los opositores, no puede tener lugar sin herir directamente los intereses nacionales al que corresponde el terreno mencionado, por tener que reputarse como baldío.

Por lo pronto, el fiscal se ve en la precisión de no reconocer en los opositores propiedad alguna territorial, base indispensable para entrar en la aplicación de las leyes de las partidas, que hablan de la accesión de terrenos por aluvión ó por las inundaciones de los ríos.

Los opositores descansan para llamarse propietarios, en la escritura de venta que se registra de fojas 26 á la 30, dada por D. Carlos de Sala y Ferrer á D. Estéban Vazquez de un terreno que se dice adquirido por virtud de una merced real y que reconoce por uno de sus límites la ribera del río Mescalapa, cuya propiedad hubo de vender D. Eugenio de Burelo, amparada por la merced real dada por el Marques de Guadalefizar.

La relación simple del vendedor no basta para adquirir derechos que solo pueden acreditarse con documentos públicos y dignos de toda fé, especialmente cuando no se cita la fecha de la merced real, ni la indemnización dada al erario para obtenerla, ni la extensión territorial que la misma merced real hubiese otorgado al primitivo ocupante. Mientras estas últimas circunstancias no se acrediten, hay que deducir con razón, que el terreno ocupado por los opositores no es de propiedad particular, al que podrán tener preferencia por su dilatada posesión bajo de la fé buena con que se consideraban propietarios.

Antes la prescripción de terrenos nacionales era inadmisibles, y si la ley de 20 de Julio de 1863 la permite, tiene que computarse el tiempo desde la fecha en que en este Estado se publicó la ley, siempre que no sea interrumpida la posesión de diez años que ella requiere, y que desde luego está interrumpida por el reclamo que hoy el fiscal se ve precisado á entablar.

El reconocimiento jurídico hecho en 1823 puede darse en contra de los derechos de los particulares, pero nunca en contra de los derechos del fisco, porque para practicar esas diligencias, no fué citado ni menos oído el representante de los intereses nacionales, que tanto en nuestra antigua organización como en la que hoy nos rige, ha existido para la debida defensa de aquellos intereses.

La vista de ojos practicada por el Juzgado de 1ª instancia del centro por comisión del Juzgado de Distrito y las operaciones del agrimensor, demuestran: que el terreno denunciado es realmente un nuevo terreno que tiene por límites la ribera del actual lecho del río de Mescalapa y la del antiguamente ocupado por el mismo río; y como la propiedad territorial que alegan los opositores, no está legalmente comprobada, ni consta de modo alguno que por ella el fisco hubiese sido indemnizado, ni la extensión de terrenos que por ella se hubiese concedido, no puede de manera alguna estimarse dicho nuevo terreno aumentado al que los opositores reputan como suyo, porque para ello falta absolutamente la base de la legítima propiedad.

Es muy del caso hacer presente al O. Juez, que el colindante Lorenzo Padron, uno de los poderdantes del Lic. D. Manuel Ramos, y que figura en la oposición, conviene en que se apruebe la mensura siempre que se le considere con una parte del terreno en que tiene su *madre*, que él conoce que es nacional, cuya confesión es de suma importancia cuando ella viene contrariando los asertos del apoderado, y se conforma con el espíritu que domina en las pruebas testimoniales rendidas por ambas partes.

Por tales consideraciones, el fiscal concluye pidiendo:

Primero; que se adjudique en propiedad á los denunciantes las setenta y nueve hectaras, ochenta y cinco aras y ochenta y una centiaras, indemnizando al cratio á razon de un peso cincuenta centavos hectara, y á

las personas que en ellos tengan cultivos ó establecimiento alguno rural, de lo que legítimamente importare, previo el debido justiprecio.

Segundo; que se advierta á los opositores la necesidad que tienen de mensurar los terrenos de que se creen propietarios para satisfacer conforme á las leyes vigentes su importe al gobierno de la República, advirtiéndoles, que si no lo hicieren, quedará libre el derecho de las personas que desearan obtenerlos para denunciarlos.

San Juan Bautista, Febrero veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Otro sí digo: que no habiéndose acumulado á estas diligencias papel necesario para despachar este pedimento, para no demorarle el fiscal ha hecho uso del papel simple, rogando al O. Juez mande que los opositores repongan el que fuere, en el del sello 3º de actuaciones.

Fecha ut supra.—*Lic. P. Rosado.*

Es copia. San Juan Bautista, Agosto diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito de Tabasco. San Juan Bautista, Abril tres de mil ochocientos setenta y uno.

Vista la denuncia presentada por el O. Encarnacion Reyes con fecha 14 de Junio del año próximo pasado, que se registra á fojas una del expediente principal y á ocasion á estos procedimientos, admitida en 17 del mismo mes, sin perjuicio de tercero; la que sobre el mismo terreno, aunque con diferentes demarcaciones tenía presentada con anterioridad el C. Silviano Mendoza, y va acumulada á fojas ocho, la cual quedó paralizada por la morosidad del promovente, quien no volvió á presentarse á ministrar papel para la continuación de las diligencias, como lo hizo constar la secretaria por una razón puesta á vuelta de la

misma foja; teniendo presente lo dispuesto en autos de seis de Setiembre del propio año, en el cual se aprueba el traspaso de la denuncia hecha por el C. Encarnacion Reyes en el de igual clase, Vicente García, se manda abrir el juicio de oposicion entre este y los que lo han promovido, y se reserva resolver sobre la reclamacion de Mendoza si hubiere lugar, segun lo que se determine en cuanto á la oposicion; visto el escrito que encabeza el segundo cuaderno en el cual el C. Lic. Manuel Ramos, representante de los CC. José María Leon y socios, formula su oposicion fundándola en que el terreno denunciado está comprendido en la propiedad de los de Istacomitan y Parrilla, que los opositores disfrutaban como herederos del finado Estéban Vazquez, quien los hubo por compra que hizo de ellos á D. Carlos de Sala y Ferrer; así mismo lo que en contra alega la parte denunciante en su escrito de fojas veintiuna á veintitres, sosteniendo que el terreno en cuestion es nacional, por cuanto siendo de nueva formacion no puede estar comprendido en los documentos exhibidos por la parte contraria; vistas las probanzas producidas por ambas, y los alegatos de bien probado, con todo lo demas del caso, el tribunal considera:

Primero; que de la informacion de la parte opositora consta la antigua posesion que los que la representan obtienen de los terrenos nombrados Istacomitan y Parrilla, inclusa la parte denunciada.

Segundo; que por la misma informacion, y aun por la contraria, se evidenciaba que esta parte ha sido formada nuevamente por el alejamiento gradual del cauce del rio.

Tercero; que los terrenos que por esta vía se forman pertenecen por accesion natural á los dueños del principal fundo á que se agregan como lo establece la ley 25., tít. 28., part. 3ª.

Cuarto; que aunque, como ha observado el C. fiscal, los terrenos de Istacomitan y Parrilla no están cubiertos con título de

propiedad, por no tener este valor la escritura de venta otorgada por D. Carlos de Sala y Ferrer á favor del finado Estéban Vazquez en 1760, único documento de propiedad que han producido los opositores, no por eso deja de favorecerles como poseedores el hecho de la accesion de que se trata, pues teniendo legítima posesion del fundo principal como es innegable, en virtud de las pruebas citadas, la accesion del que se disputa les dá sobre él el mismo derecho posesorio, segun la glosa del ilustrado Gregorio López á la palabra "señores" de la ley 25 citada, y lo que declara formalmente la ley 30 del mismo título y partida, pues aunque una y otra hablan de usufructuarios, esta denominacion no importa diferencia de caso, siendo incontestable que la posesion natural y civil envuelven el derecho de usufructuar.

Quinto; que favorecidos los opositores, segun lo dicho, por el derecho de posesion sobre el terreno cuestionado, se hallan sin la menor duda amparados por el art. 8º de la ley de 20 de Julio de 1863, para el efecto de obtener la preferencia en la adjudicacion bajo las condiciones allí establecidas, como lo solicitan al final de su oposicion de fojas 16 á 20, para el caso de no aprovecharles el derecho de propiedad en que principalmente han hecho consistir su oposicion.

Sesto; que la excepcion de *tua non interest* objetada por la parte denunciante en el último alegato contra sus contendientes, viene fuera de razon, por no haberse introducido antes de la contestacion, como exige la ley 9 tít. 3 part. 3ª 6 en los veinte primeros dias de establecida la demanda como quiere la primera, tít. 5 lib. 11. Novísima Recopilacion, supuesto ser esta excepcion de las que el derecho llama dilatorias; por cuyas consideraciones, y con fundamento de las leyes citadas, el tribunal falla:

Primero; se declara que los CC. Juan Guzman y socios tienen derecho preferente á la adjudicacion de los terrenos de que va

hecha referencia, quedando sujetos á la indemnizacion al denunciante en los términos dispuestos en el último concepto del artículo único del decreto de 19 de Setiembre de 1863.

Segundo; previa la conveniente audiencia por incidente separado, se declarará quien debe percibir dicha indemnizacion entre los CC. Silvano Mendoza y Vicente García, á quienes oportunamente se citará el efecto.

Tercero; ejecutoriado que sea el presente fallo, se evacuará el trámite prescrito en el art. 16 de la ley de 20 de Julio de 1863 para pronunciar el auto de adjudicacion, de acuerdo con lo resuelto en el punto primero.

Cuarto; los opositores quedan obligados á denunciar los demas terrenos de Istacmitan y Parrilla dentro de tres meses, conforme al art. 8º de la misma ley, y bajo la alternativa que él mismo les impone, cuyo término se les computará desde la fecha en que este fallo pase en autoridad de cosa juzgada. Lo provoyó y firma el C. Lie. Límbaro Correa, juez de Distrito del Estado por ante mí el infrascrito escribano que doy fé.—*Límbaro Correa.*—Ante mí. *Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Agosto diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Gabriel Sosa.*

VERBAL.

Juicio seguido en el juzgado de Distrito de Michoacan por el Ministerio público contra D. Ignacio Ponce de Leon, sobre pago del derecho de traslación de dominio de una finca y multa del cuatro tanto.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Denunciado como clandestino ante la

Administracion principal de rentas de esta ciudad el contrato de compraventa de una finca urbana que por valor de mil novecientos pesos enagenció el Sr. D. Ignacio Ponce á D. Nicanor Torres en 8º de Julio de 1867; se procedió desde luego á la averiguacion respectiva para los efectos de la ley; y como ningun resultado se obtuvo en la oficina del Estado ni en la Gefatura de hacienda á donde se pasaron las diligencias, se ocurrió á este juzgado para que resolviera lo que fuese de justicia sobre el particular. Hecha la declaratoria de que el Sr. Ponce debia pagar los derechos de alcabala con la multa correspondiente por la ocultacion del contrato, se exigió por la Gefatura la exhibicion de toda la suma; pero sin que se obtuviera el resultado final, porque el interesado manifestó tener excepciones que alegar ante la autoridad competente. Vueltos por tal motivo los autos á este juzgado, se pidió en forma por este Ministerio el cumplimiento de la declaratoria antes dicha, así como el que se asegurasen los bienes del responsable, de conformidad con la ley de 20 de Enero de 1837 y el auto 26 del quinto folio de Monte Mayor y Beleña.

El apoderado del Sr. Ponce se exceptuó en su respuesta con el documento que acompaña y se registra á la foja 31 de los autos, y que no es otra cosa que la copia simple del relacionado contrato, que suscriben como testigos presenciales el Sr. Lie. Barrera y su esposa. Con este documento se pretende destruir la ocultacion de la compraventa por lo que toca á los derechos del fisco, pues expresamente se dice en la cláusula 4ª que los derechos de alcabala serán de cuenta del vendedor.

El Ministerio fiscal no cree en manera alguna destruido el cargo que resulta de la ocultacion, por ser esta una circunstancia que ha venido desde su principio acompañando al referido contrato. Verdad es que los interesados no podian ignorar los términos del mismo, supuesta la copia simple de que se ha hablado, pero por lo mismo que